

El golpe de Estado en Brasil*

Coup d'Etat in Brazil

Armando Boito

En Brasil ocurrió un golpe de Estado de nuevo tipo que sustituyó a un gobierno neodesarrollista de la gran burguesía interna brasileña con base popular por otro que aplica el programa neoliberal puro y duro del capital financiero internacional. Ese cambio hacia la derecha fue provocado por la agudización del conflicto distributivo para varias fracciones de la clase dominante y diferentes clases populares.

Palabras clave: Brasil, crisis política, neoliberalismo, conflictos de clase.

There was a new-style *coup d'État* in Brazil that replaced a neo-developmentist government of the Brazilian internal bourgeoisie with a popular base by another that enforced a hard-core neoliberal agenda of international financial capital. This turn to the right was caused by the development of class distributive conflict encompassing different fractions of the ruling class and the different popular classes.

Key words: Brazil, neoliberalism, political crisis, class conflicts.

Fecha de recepción: 31/01/2018

Fecha del dictamen: 08/05/2018

Fecha de aprobación: 14/05/2018

* Traducción de Ernesto Scheinvar.

UN GOLPE DE ESTADO DE NUEVO TIPO

Hasta la década de 2010 importantes países de América del Sur caminaban en una dirección diferente de aquella de la Europa neoliberal. De un lado, Brasil y Argentina, que son las economías capitalistas más desarrolladas de la región, tenían gobiernos neodesarrollistas que intentaron, por medio de la intervención económica del Estado, estimular el crecimiento económico y realizar una redistribución, aunque sea moderada, de la renta nacional. Podríamos decir que tales gobiernos representaban, prioritariamente, a los intereses de la gran burguesía interna de esos países —en la concepción de Nicos Poulantzas (1974), la gran burguesía interna es la fracción burguesa que sin asumir una posición antiimperialista, en tanto dependiente del capital extranjero, tiene el interés de mantener y mejorar su posición respecto del capitalismo de su país de origen, lo que lo lleva a presentar conflictos moderados con el capital internacional.

Tanto los gobiernos del Partido Justicialista (PJ) en Argentina, como los del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, practicaban una política social que les propiciaba una base de apoyo popular; tanto en un caso como en el otro se formó un frente político que denominamos neodesarrollista, un tipo de alianza policlasista —heterogénea, contradictoria y débil— que constituía la base política del petismo de Lula y del peronismo de Néstor y Cristina Kirchner (Boito, 2012).

Del otro lado, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuyas economías están basadas en la explotación minera, principalmente el petróleo y el gas, y que representan un capitalismo menos desarrollado en relación con Brasil o Argentina, esos países formaron gobiernos más reformistas y ambiciosos. Si Brasil y Argentina cambiaron la política económica, social y exterior sin superar el modelo neoliberal, Venezuela, Bolivia y Ecuador fueron más lejos. América del Sur aparecía así, y a pesar de los límites de esas experiencias, como un camino posible y deseable para una parte de la izquierda internacional.

Hoy la situación en esos países cambió mucho. El gobierno y la economía en la Venezuela bolivariana están en crisis. El neoliberalismo puro y duro está de nuevo en el poder en Argentina y Brasil; en el primer caso llegó por la vía electoral, en el caso de Brasil mediante un golpe de Estado de nuevo tipo; no es un golpe militar como aquellos que ocurrieron en Brasil, Chile, Argentina o Uruguay en las décadas de 1960 y 1970, sino uno que podríamos denominar como “parlamentario”, como el ocurrido en Paraguay en junio de 2012. América del Sur dio un viraje a la derecha.

Brasil es una democracia presidencialista. El presidente es el jefe del Estado y del gobierno; dispone de un mandato de cuatro años, y en ese periodo permanece en la jefatura del Ejecutivo federal aun cuando pierda la mayoría en el Congreso Nacional

–Cámara de Diputados y Senado. Usando una expresión de muchos liberales, esa es la regla del juego. La única forma de abreviar el mandato presidencial es mediante un proceso de *impeachment*, pero para eso es necesario que el presidente haya cometido un crimen de responsabilidad.¹ O sea, no se admite, al contrario que en un régimen parlamentarista, la pérdida de mayoría en el Congreso Nacional como motivo para la destitución del jefe del gobierno, en este caso, el presidente de la República. El proceso de *impeachment* de Dilma Rousseff presentó como motivo un procedimiento fiscal banal, practicado hace años por todos los jefes del Ejecutivo en los diferentes niveles del Estado nacional –municipal, estatal y federal. Los presidentes de la República anteriores a Dilma Rousseff y también los gobernadores de Estado adoptaron el referido procedimiento. El senador que relató el proceso de *impeachment* contra Dilma Rousseff, practicó él mismo ese procedimiento cuando fue gobernador del estado de Minas Gerais. En fin, la universalidad de la ley fue puesta de lado en provecho de intereses políticos del momento que, sin respetar las reglas del juego, pretendían encontrar un camino para abreviar el mandato de la presidenta.

En mayo de 2016 Dilma Rousseff fue separada del cargo para que el proceso de *impeachment* fuera llevado a cabo, y en agosto del mismo año ella fue finalmente condenada y depuesta. Ya en la condición de interino, el nuevo gobierno liderado por Michel Temer cambió de punta a punta la política económica, la política social, la política externa y la política de reconocimiento de movimientos de población negra, de mujeres y LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). La política económica y la política social retomaron los dogmas del neoliberalismo y la política exterior se volvió a someter pasivamente a los gobiernos de Estados Unidos y la política de reconocimiento sufrió retrocesos. El giro a la derecha en Brasil fue repentino y radical.

¿QUIÉNES PROMUEVEN EL GOLPE DE ESTADO?

Nuestra tesis es que el capital internacional y la fracción de la burguesía brasileña integrada a ese capital fueron las fuerzas dirigentes del golpe de Estado que depuso a

¹ Los crímenes de responsabilidad son infracciones definidas por la ley federal, cometidas en el ejercicio del mandato presidencial. La Constitución Federal define en su artículo 85 como crimen de responsabilidad conductas que hieran la Constitución, la existencia de la Unión, la seguridad interna, la probidad administrativa, la ley presupuestal o el ejercicio de derechos políticos y el cumplimiento de leyes y decisiones judiciales.

Dilma Rousseff (Boito, 2016).² El golpe de Estado de agosto de 2016 fue sobre todo una victoria del imperialismo y de la burguesía asociada. La nueva política económica y la nueva política externa de apertura amplia y acelerada al capital internacional y al capital extranjero en diversas áreas de la economía ilustran esa tesis. Esas fracciones burguesas estuvieron desde el inicio del ciclo de los gobiernos del PT (2003-2016) contra la política económica neodesarrollista y contra la política externa llamada Sur-Sur de los dos gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff (2011-2016). Las diversas medidas para favorecer a las grandes empresas nacionales, proteger el mercado interno brasileño, priorizar a Petrobras en la explotación del petróleo en aguas profundas, para expandir el crédito público y subsidiado para las empresas nacionales abastecido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la participación del gobierno de Dilma Rousseff en la construcción del Banco de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), fueron combatidas por esas fracciones del capital.

No afirmamos que se trató de una acción aislada del imperialismo. Además de contar con una alianza de la burguesía asociada brasileña, el golpe de Estado fue apoyado activamente por un movimiento masivo de la alta clase media y logró neutralizar, como veremos, una parte de las clases populares. La alta clase media realizó, con apoyo activo de los grandes medios, varias y grandes manifestaciones callejeras por la deposición de Dilma Rousseff. El objetivo principal de esas manifestaciones no era necesariamente la política económica, pero sí la política social de los gobiernos del PT; política que Dilma Rousseff mantuvo y profundizó al menos en su primer mandato (2011-2014). La alta clase media sólo veía en esa política costos financieros que serían pagados por ella, así como una amenaza a la posición social privilegiada que ocupa en la sociedad brasileña (Cavalcante, 2015). Desde los gobiernos Lula da Silva (2003-2010) esas políticas eran muy criticadas por los representantes políticos e intelectuales de la fracción superior de la clase media. En 2015 esa crítica se transformó en protesta “de masa”. Movimientos organizados a partir de 2013 por ese sector social, de los cuales los más importantes son el Movimiento “Brasil Livre” (MBL) y el movimiento “Vem para Rua” (VPR), realizaron, con ayuda activa de los medios, grandes manifestaciones callejeras en 2015 e inicios de 2016.

Esas manifestaciones, que reunieron a millares de manifestantes en las grandes y medianas ciudades del país, fueron decisivas para presionar al Congreso Nacional para

² Posteriormente analizaremos el hecho de que una parte de la burguesía interna, cuyos intereses eran favorecidos por el gobierno de Dilma Rousseff y que sustentaban su gobierno, para finales del 2015 se pasó al campo de la oposición y se adhirió al golpe.

votar favorablemente el *impeachment* de Dilma Rousseff. La base política del gobierno en el Congreso Nacional era frágil. Los partidos de izquierda y de centro-izquierda tenían menos de un tercio de los curules y por ello el gobierno dependía de la alianza con diversos partidos de clientela y conservadores. Presionados por los sectores empresariales que se hicieron presentes en Brasilia en los momentos decisivos de la votación del *impeachment* y bajo el impacto de las manifestaciones, la base parlamentaria del gobierno colapsó y la oposición pudo obtener, con cierta soltura, los dos tercios de los votos necesarios para el *impeachment*. Analistas de la política sudamericana han destacado que el golpe de Estado de nuevo tipo sólo fue eficaz en Brasil y Paraguay porque en estos países los partidos de izquierda y de centro-izquierda eran altamente minoritarios en el Congreso Nacional, situación muy diferente de países como Argentina o Chile cuyos gobiernos progresistas tenían base parlamentaria mayor y más sólida y donde los partidos neoliberales sólo podían tomar el gobierno por la vía electoral.

Toda la lucha por la deposición de Dilma Rousseff fue presentada por los movimientos de la alta clase media como una lucha contra la corrupción. La cuestión es compleja. Primero porque Estados Unidos, por intermedio de su Departamento de Justicia y otras instituciones vinculadas con el imperialismo estadounidense, han patrocinado campañas contra la corrupción en escala planetaria y, principalmente, contra gobiernos progresistas de los países dependientes; esas campañas son usadas como medio para arrinconar a tales gobiernos (Bratsis, 2014).

La campaña contra la corrupción en Brasil fue asesorada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por intermediación de convenios con el Poder Judicial y el Ministerio Público brasileños, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece cursos para entrenar a los jueces y promotores que participaron de la denominada “Operación Lava Jato”.³

³ La operación Lava-Jato es una maniobra judicial semejante a la operación “Manos Limpias” (*Mani Pulide*) ocurrida en Italia en la década de 1990. La operación brasileña, cuya aparición pública se dio en 2014, es conducida por jueces y procuradores entrenados en Estados Unidos y dispuso, hasta la declaración de Dilma Rousseff, del apoyo amplio, activo y consensual de la gran prensa, siendo que tal apoyo consensual y activo cedió lugar a un apoyo crítico y condicional tras la llegada de Michel Temer a la Presidencia de la República. La operación investigó principalmente los financiamientos de las campañas electorales del PT y de algunos partidos aliados a éste. La operación investigó y condenó a varios dirigentes del PT, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) así como a los propietarios de grandes empresas brasileñas, de integrantes de segmentos importantes de la burguesía interna. Esa operación es criticada por varios juristas brasileños por atentar contra los derechos constitucionales, por condenar sin pruebas y por la selectividad de las investigaciones que son dirigidas contra el PT y los partidos aliados, excluyendo al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Esa operación tuvo un papel fundamental en el golpe de Estado de 2016 al crear, con el auxilio activo de los grandes medios, un clima muy favorable para el crecimiento de las manifestaciones callejeras contra el gobierno de Dilma Rousseff –aun cuando nunca se haya descubierto participación directa o indirecta de la presidenta en cualquier acto ilícito. En resumen, la campaña contra la corrupción es uno de los hechos empíricos que indican la participación del capital internacional en el golpe de Estado contra del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, la alta clase media que alimentó la base de masas de esas campañas no es, al contrario de cierto sentido común de la izquierda brasileña y reproducido en el reciente libro de Jessé Souza, un títere en las manos del imperialismo y de la burguesía –o de las “élites” para utilizar la noción preferida de ese autor.⁴ La alta clase media fue una aliada y, por motivos particulares, de las fuerzas dirigentes del golpe de Estado. Ya dijimos que la alta clase media luchaba contra los gobiernos del PT por oponerse a la política social de dichos gobiernos. Es verdad que al hacer eso tuvo que adherirse, prácticamente, a la plataforma del imperialismo y de la burguesía asociada, plataforma que no contempla muchos de los intereses de la clase media alta. Pero la subordinación política, contingencia de la correlación de fuerzas, es diferente a una adhesión por mera manipulación. En cuanto a la bandera de lucha contra la corrupción, ese es otro elemento complejo del problema.

Tradicionalmente en Brasil, en momentos de crisis política que envuelven gobiernos progresistas y de base popular, la alta clase media se moviliza en torno de la bandera de lucha contra la corrupción. Fue así en 1954 con la destitución de Getulio Vargas y también en 1964 cuando el golpe militar depuso a João Goulart. Es un error suponer que la clase media se hace de dicha bandera como un mero disfraz usado conscientemente para ocultar intereses inconfesables. La ideología de la meritocracia que es propia de los trabajadores no manuales a los que estamos designando como “clase media” necesita de un Estado cuyas instituciones preserven su apariencia pública (Boito, 2017). El valor del diploma y la legitimidad del concurso público para los puestos estatales, tan apreciados por la clase media, dependen de esa apariencia del Estado burgués, y la práctica de la corrupción atenta contra esa imagen. Ese tipo de denuncia contra la corrupción –y no me refiero a todo y cualquier enfoque de lucha contra la corrupción– tiene su origen en la ideología de la clase media y no es por lo tanto una mentira montada conscientemente para engañar al pueblo. Sin embargo,

⁴ Jesse Souza llega a rotular a los manifestantes de clase media de “idiotas” e “imbéciles” y suscita que los manifestantes serían meros títeres manipulados por las élites y los grandes medios. Véase Sousa (2016).

sabiendo que el lugar de Dilma Rousseff, contra quien no había ninguna acusación o denuncia de corrupción, sería ocupado por Michel Temer, un político públicamente reconocido como muy corrupto, los movimientos de clase media, si hubieran tenido como prioritaria la lucha contra la corrupción como decían tener, no podrían haberse callado frente a tal perspectiva. Sin embargo ellos aceptaron sin protesta a Michel Temer. No hubo manifestaciones contra la corrupción practicada a cielo abierto por Temer y sus auxiliares antes y después del golpe de Estado y tampoco contra el hecho de que Temer creara, al contrario de lo que hacía el gobierno de Dilma Rousseff, serias dificultades para las investigaciones de actos de corrupción por el sistema de justicia. Eso indica, según nuestro análisis, que el enemigo principal de la alta clase media no era la corrupción, sino la política social de los gobiernos del PT. La operación ideológica consistió no en difundir mentiras, sino en colocar en primer plano del discurso la agitación contra la corrupción, cuando ésta ocupaba en las preocupaciones de la alta clase media, de hecho, un papel secundario. Consciente o intuitivamente, los manifestantes y sus organizaciones sabían que un discurso transparente contra la política social no lograría atraer o neutralizar a sectores populares que apoyaban a Dilma Rousseff, siendo lo contrario cuando se pasa al discurso contra la corrupción.

En la escena política, el capital internacional, la burguesía asociada y la alta clase media estaban representadas por el así llamado Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En este punto es necesario hacer una aclaración. Ni por su pasado ni por su presente, ese partido puede ser considerado un partido social-demócrata. Nunca tuvo base obrera o sindical. Siempre fue un partido de cuadros burgueses y de clase media y ha sido la vanguardia de la política neoliberal en Brasil. Estuvo en el gobierno entre 1995 y 2002 durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que es uno de los fundadores del PSDB y que fueron los gobiernos responsables por la implantación del modelo capitalista neoliberal en Brasil. Pero las fracciones burguesas citadas y la alta clase media están representadas también por la alta burocracia del Estado, principalmente por el sistema de justicia –Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Federal. Ese ramo de la burocracia del Estado tuvo un papel importante en la crisis política. Sus integrantes son, ellos mismos, individuos pertenecientes al mismo tiempo a la alta clase media y a la burocracia del Estado, más precisamente al “brazo derecho del Estado”, para utilizar la expresión acuñada por Pierre Bourdieu. El PSDB desencadenó la crisis política que resultó en el *impeachment* de Dilma Rousseff al no aceptar la cuarta derrota consecutiva ante un candidato del PT en las elecciones presidenciales –2002, 2006, 2010 y 2014. En cuanto al sistema de justicia, éste organizó una persecución judicial implacable y que atentaba contra los derechos y libertades individuales de los integrantes del Partido de los Trabajadores,

siempre alegando la lucha contra la corrupción y produciendo un clima favorable a los partidos que defendían el golpe de Estado.

Los gobiernos del PT, como afirmamos, organizaron la hegemonía de la gran burguesía interna en el seno del bloque de poder, relegando los intereses del capital internacional y de la burguesía asociada con un segundo plano.⁵ La rivalidad entre las fracciones burguesas repercutió en las instituciones del Estado brasileño. Algunas fueron convertidas en centros de poder de una u otra de esas fracciones. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Petrobras y el Ministerio de Hacienda se convirtieron en agencias que aplicaban en lo fundamental la política neodesarrollista, pudiéndoseles considerar centros de poder de la gran burguesía interna. El Banco Central de Brasil (Bacen) y el sistema de justicia expresaban los intereses del capital financiero nacional e internacional. La operación Lava-Jato utilizó la persecución judicial para desorganizar y desmoralizar los centros de poder de la gran burguesía interna, desarticulando la red de protección que las grandes empresas nacionales habían obtenido para sus intereses, incluso por intermediación de la corrupción de los responsables de las citadas agencias e instituciones (Boito y Saad-Filho, 2016).

Vamos a enumerar los elementos del proceso político que condujeron al golpe de Estado. No vamos a referirnos aquí a los ya citados componentes económicos y sociales de la crisis que fueron la ofensiva del capital internacional, de la burguesía asociada y de la movilización de la alta clase media contra el gobierno neodesarrollista de Dilma Rousseff. Los elementos del proceso político que queremos destacar son variados. Primero, el ya citado hecho de que el PSDB no aceptó la derrota en la elección presidencial de 2014 y por lo tanto inició una serie de acciones en la justicia intentando anular el resultado de las urnas; segundo, el hecho también ya citado de la pequeña representación de los partidos de izquierda y del centro izquierda en el Congreso Nacional; tercero, el que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido de clientela y siempre dispuesto a apoyar al gobierno del momento a cambio de cargos y partidas del Estado, retiró su apoyo al gobierno de Dilma y elaboró un programa neoliberal puro y duro para propiciar la ascensión de Michel Temer, entonces vicepresidente de Dilma; cuarto, el “periodismo de guerra” practicado por los grandes medios contra el gobierno; quinto, la persecución judicial contra el PT, contra las grandes empresas nacionales del ramo de la construcción pesada y contra Petrobras, que dio los argumentos morales al golpe de Estado; en fin, el hecho de que cerca de un tercio o más de los diputados y senadores fueran ellos mismos denunciados o reos en las

⁵ Utilizo el concepto de bloque de poder y de hegemonía de acuerdo con Poulantzas (1968).

investigaciones de corrupción y se encontraban descontentos con la política de Dilma Rousseff de no intervenir en los trabajos de la operación Lava-Jato.

El 2 de diciembre de 2015 el presidente de la Cámara de Diputados aceptó tramitar la demanda presentada por tres juristas conservadores para la apertura de un proceso de *impeachment* contra la presidenta; el 13 de marzo de 2016 tuvo lugar la mayor manifestación por la deposición del gobierno; misma que fue insuflada por la acción ilegal de la operación Lava-Jato de divulgación de grabaciones, también ilegales, hechas en conversaciones telefónicas entre Dilma Rousseff y el ex presidente Lula da Silva. El 17 de abril el plenario de la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a favor y apenas 137 en contra, la apertura del proceso de *impeachment*; el 12 de mayo el Senado autorizó por 55 votos a favor y 22 en contra la continuación del proceso, y el 31 de agosto fue declarada culpable por el Senado por 61 votos contra 20, siendo depuesta Dilma Rousseff de la presidencia de la República. En esos ocho meses en que transcurrió el proceso de *impeachment*, el gobierno jamás apeló a los trabajadores para que defendieran el mandato que obtuvieron en las urnas en 2014.

LA FRÁGIL RESISTENCIA AL GOLPE DE ESTADO: LOS TRABAJADORES

¿Por qué Dilma Rousseff fue abandonada en la crisis política por los sectores sociales que hasta entonces eran beneficiados por las políticas aplicadas en su gobierno? Esta cuestión se aplica a la burguesía interna, al movimiento sindical y a los trabajadores de la masa marginal. Cada uno de estos sectores, a su manera, estuvieron ausentes o, a lo más, presentes tímidamente en el movimiento de defensa del gobierno o por lo menos del mandato de la presidenta.

En este punto tocamos temas clásicos de la sociología brasileña y latinoamericana. Se trata de la cuestión del comportamiento político pendular de las burguesías locales y de la cuestión del populismo. Muchos observadores y analistas políticos brasileños imaginaban que eran temas del pasado, pero nosotros pensamos que son centrales para la comprensión de la dinámica de la crisis política de 2015-2016.

El movimiento sindical, que para Brasil habla de menos de la mitad de los trabajadores asalariados, pues sólo admite aquellos que tengan un contrato legal de trabajo, siempre ocupó una posición subalterna en el frente político neodesarrollista que sustentaba a los gobiernos del PT. Es cierto que con el crecimiento económico y la enorme reducción del desempleo, los sindicatos mejoraron mucho sus condiciones de lucha y aprovecharon la coyuntura favorable activando la lucha huelguista y obteniendo mayores condiciones colectivas ventajosas. En 2003, en el primer año del primer

mandato de Lula da Silva, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) registró 312 huelgas y, entre los acuerdos recopilados por esa institución, se constató que apenas 18% de éstos consiguieron un ajuste real superior a la tasa de inflación, esto es, un aumento real de salarios. Esas cifras aumentarían a lo largo del ciclo de gobiernos del PT. Diez años después, en 2013, el DIEESE cuantificó más de 2 mil huelgas, un récord histórico para Brasil, y entre los acuerdos colectivos de trabajo analizados, 95% de éstos consiguieron un aumento real de salario (Boito, Galvão y Marcelino, 2015). La diferencia es clara. Sin embargo, estos triunfos significativos, aun cuando indirectamente fueron favorecidos por la política económica del gobierno para estimular el crecimiento económico, dependieron directamente de la propia acción organizada y de la lucha de los trabajadores.

Las demandas presentadas por el sindicalismo al gobierno en momentos simbólica y políticamente importantes, como en la gran reunión del Estadio de Pacembu en São Paulo durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2010, fueron cuasi o totalmente ignoradas: la reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas; mejorías en la legislación de jubilaciones; reglamentación restrictiva para la tercerización; fin del despido sin justificación; garantía de negociación salarial para los funcionarios públicos; la revisión de la tabla de impuestos sobre la renta, entre otras.

La política de ajuste fiscal adoptada por Dilma Rousseff en 2015 durante el primer año de su segundo mandato presidencial, que se encontraba en flagrante contradicción con su discurso y las promesas que la candidata hizo en la campaña electoral de 2014, agravaron la situación. Estos hechos aumentaron el foso entre el movimiento sindical y los gobiernos del PT, estimulando deserciones de las organizaciones sindicales hacia la derecha e izquierda del campo político neodesarrollista. Es cierto que las direcciones y algunos militantes de tres confederaciones sindicales –Central Unica de Trabajadores (CUT), Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB) y la Intersindical– participaron de las manifestaciones contra la deposición de Dilma Rousseff, pero todos los sindicatos importantes de esas mismas centrales se abstuvieron de luchar: metalúrgicos, químicos, la construcción civil, petroleros, correos, bancos y administración pública.⁶ La participación del movimiento sindical en la lucha contra el golpe de Estado fue, por lo tanto, muy débil o cuasi nula.

Los trabajadores de la masa marginal, a diferencia de los sindicalizados, obtuvieron mejoras provenientes directamente de la acción gubernamental: programas de trans-

⁶ En Brasil muchos sindicatos no se afilian a ninguna central sindical y aquellos que lo hacen son independientes frente a la central sindical. De esta forma las confederaciones son organismos débiles y con poca capacidad de centralización del movimiento en su conjunto.

ferencia de renta, expansión de los servicios públicos para la población de baja renta –principalmente energía eléctrica y agua para las regiones semiáridas–, programas educativos destinados a la enseñanza profesional básica, construcción de casas populares y otros. Esos trabajadores se volvieron la principal base político-electoral de los gobiernos del PT y éstos son el sector más numeroso de la población brasileña (Singer, 2012). Lo que pasa es que el PT y el gobierno no se ocuparon de organizar a esos trabajadores. Ambos mantuvieron una relación política de tipo populista con esa base social. Aquí cabe hacer una comparación histórica hasta cierto punto sorprendente. El populismo de mediados del siglo pasado, cuya figura mayor fue Getúlio Vargas, un gran propietario de tierra, tenía como principal base social al movimiento sindical urbano, marcadamente obrero; el populismo actual, cuya figura principal es Lula da Silva, un ex-sindicalista metalúrgico, tiene como principal base social los trabajadores de masa marginal.⁷ Los candidatos del PT esperaban un apoyo electoral de esa base social, pero no tenían como objetivo organizar y educar políticamente a esos trabajadores. Los movimientos populares basados en esos trabajadores y que son movimientos que tratan exactamente de superar la postura populista de esos trabajadores empobrecidos y, en su inmensa mayoría desorganizados, hicieron que esos movimientos fueran el ala popular y activa presente en las manifestaciones de resistencia al golpe de Estado parlamentario. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), el Movimiento de los Trabajadores Afectados por las Represas (MAB), y otros, estaban con sus militantes y con sus banderas en las manifestaciones que defendían el mandato que Dilma Rousseff obtuvo en las urnas.

Lo que ocurre es que dichos movimientos, en razón de la dificultad para organizar una base social heterogénea y focalizada en demandas de urgencia tales como tierra y habitación, que además tienden a desmovilizar a aquellos que las obtienen, hace que finalmente esos movimientos reúnan a una fracción minoritaria de los trabajadores de la masa marginal. La gran masa de campesinos pobres, vendedores ambulantes, trabajadores independientes cualificados, trabajadores domésticos y subempleados o desempleados de larga duración, estuvieron ausentes en la resistencia al golpe de Estado.

⁷ No debemos confundir la situación de esta base social que no llega a integrar un bloque de poder con su situación de clase o con alguna fracción de clase hegemónica en el seno del bloque. Este es el sector que tiene sus intereses priorizados con la política gubernamental; aquellos que sólo obtienen ganancias secundarias y que son compatibles con la política de fracción hegemónica. André Singer (2012:74-76, 159-160, 219), que tuvo el gran mérito de analizar la importancia de los trabajadores de masa marginales en la sustentación de los gobiernos del PT, comete un error al caracterizar a tales gobiernos como “representantes del subproletariado”.

Esa masa permaneció dispersa y políticamente pasiva. En la relación política populista, los trabajadores esperan que el gobierno actúe por su propia iniciativa en defensa de los “pobres” y no pueden concebir que éstos puedan o deban actuar en defensa del gobierno. En el golpe de Estado de agosto de 2016, además de esta tendencia político-ideológica espontánea de este sector social, es notable que el gobierno tampoco pensó la hipótesis de movilizar a esos trabajadores en su defensa. La masa de los marginalizados que garantizó la victoria electoral de Dilma Rousseff en 2014 se ausentó del proceso político durante la crisis de 2015-2016. Ellos sólo reaparecieron en la escena política un año después del golpe de Estado. Fue a partir de julio de 2017 que respondieron al llamado de Lula da Silva en su periplo que hizo por los estados de la región Nordeste del país para protestar contra la persecución judicial de la cual el dirigente del PT estaba siendo víctima. A diferencia de Dilma Rousseff que limitó la defensa de su mandato a acciones al interior de las instituciones del Estado, Lula da Silva buscó desde entonces combinar la lucha institucional al interior de lo jurídico con la movilización popular. Lula da Silva dio por lo tanto un paso al frente, pero sin romper con la relación de tipo populista: con su caravana llamada “Lula por Brasil” no tomó ninguna iniciativa para organizar a la masa que lo recibió con entusiasmo en las capitales y ciudades del interior del país.

LA FRÁGIL RESISTENCIA AL GOLPE DE ESTADO: LA BURGUESÍA INTERNA

¿Qué pasó con la fracción de la burguesía que se benefició con la política económica de los gobiernos del PT, y del gobierno de Dilma Rousseff? En este punto tocamos un debate antiguo del movimiento comunista latinoamericano y también el debate más reciente sobre la mundialización.

De hecho, el reciente proceso de mundialización del capital condujo a ciertos analistas a creer que habría desaparecido no sólo la burguesía nacional sino también la fracción de la burguesía que Nicos Poulantzas (1974) denominó como burguesía interna. Según estos autores, tendríamos hoy una “burguesía mundial” que habría vuelto obsoleta la idea de los conflictos entre diferentes burguesías de distintas regiones o países. Autores como William Robinson (2016) y Kees Van Der Pijl (2016) son partidarios bien conocidos de esa tesis.⁸ Nosotros pensamos que si bien es verdad que en

⁸ El número 60 de *Actual Marx* es dedicado al debate sobre la cuestión de la burguesía mundial. El *dossier* tiene por título la pregunta “¿Une classe dominante mondiale?”.

Brasil no existe una burguesía nacional posible de asumir posiciones antiimperialistas, también es verdad que existe una fracción de la burguesía brasileña que aun siendo dependiente del imperialismo en los niveles financieros y tecnológico tiene, a pesar de ello, la intención de mantener y mejorar la posición que ocupa en el capitalismo brasileño, entrando así en conflictos, moderados y selectivos, con el capital imperialista.⁹ Si ignoramos este hecho no podemos comprender los procesos políticos recientes de países de América del Sur como Brasil o Argentina. En éstos, como ya indicamos, los gobiernos petistas y peronistas obtuvieron el apoyo de la gran burguesía interna para llevar la política económica hacia la política neodesarrollista.¹⁰

¿Por qué esa fracción de la burguesía no defendió activamente al gobierno de Dilma Rousseff? Aún más, ¿por qué varios segmentos de esta misma fracción, siendo el caso más notorio el de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), se sumaron abiertamente al movimiento golpista?

A pesar de ser la clase dominante, la burguesía y sus fracciones actúan bajo presión de las circunstancias. Ellas no poseen necesariamente la clarividencia, la capacidad organizacional y la libertad de acción que numerosos analistas de izquierda se imaginan.

⁹ En América Latina fue muy criticada la tesis de la Internacional Comunista que postulaba la existencia de una burguesía nacional capaz de tomar posiciones antiimperialistas en países como México, Brasil o Argentina. Una referencia bibliográfica importante sobre este tema es el libro de Caio Prado Jr. Sin embargo, al criticar la tesis de la burguesía nacional, Prado Jr. acabó por despreciar el papel de la burguesía brasileña en la historia política nacional. Una visión más matizada sobre el tema se puede encontrar en los análisis de Jacob Gorender. Véanse Prado (1966) y Gorender (1981). Jaime Osorio (2017) es un autor que interviene en el debate más reciente sobre la mundialización con una posición también diferente de aquella de los autores que hablan de la burguesía mundial.

¹⁰ Para obtener información sobre la posición de los sectores de la burguesía brasileña frente a la política gubernamental es necesario revisar los periódicos y los documentos de las grandes asociaciones de empresarios. La burguesía interna brasileña está organizada en una serie de asociaciones de distinto alcance que reúnen al conjunto de empresas de todos los ramos de la economía –bancos, industria, agricultura, comercio– y también por asociaciones más especializadas –de productores de agricultores de un producto específico, de un determinado segmento industrial o bancario, etcétera. Nosotros hicimos una investigación del material publicado por los periódicos de varias de estas asociaciones en ambos periodos del gobierno de Dilma Rousseff, y el último corresponde al periodo de la crisis política que analizamos. De entre estas asociaciones destaco las siguientes: Confederación Nacional de la Industria (CNI), Federación de la Industria del Estado de São Paulo (Fiesp), Sindicato de la Construcción Naval (Sinaval), Asociación Brasileña de Máquinas y Equipamientos (Abimaq), Asociación Brasileña de la Industria de Base (ABDIB), Confederación Nacional de Agricultura (CNA) y Asociación Brasileña del Agronegocio (Abag).

En Brasil, la gran burguesía interna estaba representada por un gobierno liderado por un partido político que no fue construido por la propia burguesía y justamente por eso contaba con mayor libertad para imponer a esa burguesía las concesiones necesarias para que el gobierno pudiera organizar una base de apoyo popular para la política neodesarrollista. Eso permitió que los intereses de la gran burguesía interna prevalecieran frente a los del capital internacional y la burguesía asociada. La lectura de la prensa de las asociaciones patronales permite ver que durante los años de crecimiento económico, cuando aún estaba fresco en la memoria el estancamiento y la apertura económica radical de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), esa fracción burguesa aceptó la imposición de tales concesiones –valorización del salario mínimo, política de transferencia de renta y las otras ya citadas. Al menos hasta 2013, los documentos de las asociaciones patronales, cuando ellos enumeraban los puntos de estrangulamiento y las dificultades de la economía brasileña, colocaban el acento en la política social de los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

La situación comenzó a cambiar a partir de 2013. La nueva coyuntura presentaba un crecimiento económico bajo con conservación del empleo, progresión de las conquistas salariales de los trabajadores, una ofensiva ideológica del capital internacional y de la burguesía asociada contra la denominada “nueva matriz de política económica” del ministro Guido Mantega. A pesar de estas dificultades y de las crecientes demandas empresariales no atendidas, en 2014 la candidatura de Dilma Rousseff obtuvo más financiamiento empresarial que la candidatura de su adversario del PSDB, Aécio Neves. No existía todavía en aquel año un “frente único burgués” contra el gobierno del PT (Bastos, 2017). El cuadro cambió, de hecho, en 2015 con el ajuste fiscal del segundo gobierno de Dilma. Fue en esta nueva coyuntura que la burguesía interna comenzó a ver en las concesiones que garantizaban el apoyo popular del neodesarrollismo un precio demasiado elevado. Diez años antes, en 2005, cuando hubo una crisis política aguda que sacudió al gobierno de Lula da Silva, la burguesía interna defendió al presidente Lula.¹¹ El lazo entre representante (gobierno Lula da Silva) y representado (burguesía interna) estaba fuerte. No fue lo que ocurrió diez años más tarde cuando el gobierno de Dilma Rousseff entró en crisis.

En la década de 1990, la gran burguesía interna apoyó el neoliberalismo en los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Apoyaba principalmente las privatizaciones y la desregulación del mercado de trabajo. Con todo, ya en aquella época diferentes segmentos de esta fracción burguesa hacían críticas a aspectos de la política neoliberal. La industria criticaba la apertura comercial que consideraba muy amplia y abrupta; la

¹¹ La posición de la burguesía interna en la crisis de 2005 es analizada por Martuscelli (2015).

burguesía agraria criticaba la drástica reducción del financiamiento público y subsidiado a la agricultura, que era una consecuencia del ajuste fiscal de ese entonces; los bancos nacionales se oponían a la política de desnacionalización del sector bancario iniciada aceleradamente por Fernando Henrique Cardoso. Esas contradicciones entre la burguesía interna y el gobierno neoliberal fueron agravándose. Bajo una situación en que el PT comenzaba a diluir su programa político, abandonando la plataforma de un Estado de bienestar social, y pasando a defender una especie de retomada del desarrollismo, la gran burguesía interna se aproximó a este partido.¹² A mediados de la década de 2010, esa misma fracción burguesa, realizando su característico movimiento pendular, comenzó a moverse en dirección a la plataforma neoliberal.

Las asociaciones industriales y el sector agrícola que investigamos presentan algunas reivindicaciones que aparecen de modo recurrente a lo largo del primer mandato de Dilma Rousseff (2011-2014) y también durante la crisis política (2015-2016). En esta lista de reivindicaciones recurrentes se destacan dos grupos diferentes. El primero denuncia los intereses del capital internacional y financiero, en tanto que el segundo apunta contra los trabajadores. El primer grupo prevaleció en los dos o tres primeros años del gobierno de Dilma, en cuanto que el segundo ganó importancia a partir de 2013-2014. En el primer grupo de reivindicaciones recurrentes tenemos: tasas de intereses bajas, depreciación del cambio, préstamos subvencionados por los bancos públicos, inversiones en infraestructura, política de contenido local (proteccionismo), política industrial y otras. En el segundo grupo tenemos: reforma de la seguridad social, reforma del derecho laboral, ajuste fiscal basado en la reducción de los gastos sociales y del salario de los funcionarios públicos y otras. Acompañando a la prensa de las asociaciones empresariales, queda claro que el segundo grupo de reivindicaciones gana importancia conforme el periodo de débil crecimiento económico se prolonga y en tanto crece y se fortalece la campaña de la fracción burguesa asociada por el ajuste fiscal en detrimento de los trabajadores. Finalmente esa era también una demanda histórica de la gran burguesía interna.

El proceso es complejo. La burguesía interna vaciló y una parte de ésta pasó al campo de oposición al gobierno de Dilma. Un segmento del sector financiero tomó medidas para intentar salvar al gobierno todavía en octubre de 2015, hecho relatado en detalle en el libro escrito por el secretario de Prensa del gobierno de Dilma (De Almeida, 2017). Otra parte importante de la burguesía interna, el segmento de la construcción pesada, fue colocada fuera de combate en la víspera misma de la crisis política por la

¹² Analicé las relaciones de la burguesía con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Véase Boito (1999).

operación Lava-Jato; presidentes y propietarios de las grandes constructoras brasileñas fueron procesados y condenados y sus empresas fueron prohibidas de participar en licitaciones para obras públicas. Otra parte de la burguesía interna se quedó neutra en la crisis —fue el caso de la industria naval, que fue muy beneficiada por los gobiernos del PT. El segmento de la industria manufacturera participó activamente del golpe de Estado —el caso más notorio es la acción de la Fiesp, que declaró su apoyo oficial al golpe de Estado en diciembre de 2015. Conviene recordar que desde 2001 la industria manufacturera crecía menos que los demás sectores debido a la gran penetración de las manufacturas chinas en el mercado brasileño. La gran burguesía interna no se reconocía más en el gobierno que hasta entonces la representaba. La ofensiva neoliberal restauradora encontró entonces el camino abierto para avanzar.

EL DESAFÍO DE LA IZQUIERDA

No hubo resistencia significativa al golpe de Estado y tampoco hubo resistencia significativa a la política neoliberal extrema del gobierno de Michel Temer. Se suceden las medidas de ataque a los derechos laborales, a la soberanía nacional, al ambiente, a la educación y a la cultura. El régimen democrático no fue abolido, pero entramos en una fase que podríamos llamar de democracia restringida. Las respuestas de los demócratas y del movimiento popular han sido insuficientes. Los problemas a los que se enfrenta la izquierda en Brasil presentan semejanzas con aquellos enfrentados por la izquierda en otros países de América del Sur. La ola rosa de gobiernos que aplicaban un reformismo superficial está pasando y los gobiernos con programas reformistas más ambiciosos están en crisis. En el caso de Brasil la tendencia dominante en la izquierda es la de caracterizar al momento actual como una situación de defensiva, de correlación de fuerzas muy desfavorables y busca construir la unidad de las fuerzas socialistas, populares y democráticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Bastos, Pedro Paulo (2017). “Que horas ela volta? Economia política e política econômica de Lula a Dilma”, en Gilberto Maringoni y Juliano Medeiros, *Cinco mil dias. O Brasil na era do lulismo*. São Paulo: Editora Boitempo.
- Boito, Armando (1999). *Política neoliberal e sindicalismo no Brasil*. São Paulo: Editora Xamão.
- (2012). “As bases políticas do neodesenvolvimentismo” [<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16866>].

- (2016). “Uma crise no caminho do neodesenvolvimentismo”, *História e Luta de Classes*, núm. 12, septiembre.
- (2017). “A corrupção como ideologia”, *Crítica Marxista*, núm. 44 [<https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista>].
- , Andréa Galvão y Paula Marcelino (2015). “La nouvelle phase du syndicalisme brésilien (2003-2013)”, *Cahiers des Amériques Latines*, núm. 80 [<https://cal.revues.org/4184>].
- Boito, Armando y Alfredo Saad-Filho (2016). “State, State Institutions, and Political Power in Brazil”, *Latin American Perspectives*, vol. 1.
- Bratsis, Peter (2014). “Political corruption in the age of transnational capitalism”, *Historical Materialism*, vol. 22, núm. 1.
- Cardoso, Fernando Henrique (2015). *A miséria da política: crônicas do lulopetismo e outros escritos*. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira.
- Cavalcante, Savio (2015). “Classe média e conservadorismo liberal”, en Sebastião Cruz, André Kysel y Gustavo Codas (orgs.), *Direita, volver. O retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.
- De Almeida, Rodrigo (2017). *À Sombra do Poder. Os Bastidores da Crise que Derrubou Dilma Rousseff*. São Paulo: Casa da Palavra.
- Grender, Jacob (1981). *A burguesia brasileira*. São Paulo: Editora Brasiliense.
- Martuscelli, Danilo Enrico (2015). *Crises políticas e capitalismo neoliberal no Brasil*. Curitiba: CRV Editores.
- Osorio, Jaime (2017). “Capitalismo, Estado y sistema mundial: contradicciones económicas y políticas”, *Crítica Marxista*, núm. 44.
- Poulantzas, Nicos (1974). *Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui*. París: Éditions du Seuil.
- (1968). *Pouvoir politique et classes sociales*. París: Maspero.
- Prado, Caio Jr. (1966). *A revolução brasileira*. São Paulo: Editora Brasiliense.
- Robinson, William (2016). “L'heure du changement de paradigme: la montée du capital transnational et le débat sur la classe mondialisée”, *Actuel Marx*, núm. 60.
- Singer, André (2012). *Os sentidos do lulismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Souza, Jessé (2016). *A radiografia do golpe*. São Paulo: Editora Leya.
- Van Der Pijl, Kees (2016). “Transnational et national Dans la formation de la classe capitaliste”, *Actuel Marx*, núm. 60.

FUENTES PRIMARIAS

- Associação Brasileira de Indústria de Base (ABDIB) [<https://www.abdib.org.br>].
- Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) [<http://www.abimaq.org.br/>].
- Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) [<http://www.abag.com.br/>].
- Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) [<http://www.cnabrazil.org.br/>].
- Confederação Nacional da Indústria (CNI) [www.fiesp.com.br].
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) [<http://www.fiesp.com.br/>].
- Sindicato da Construção Naval (Sinaval) [<http://sinaval.org.br/>].